AUTORIDAD DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

AEE

GOBIERNO DE PUERTO RICO

18 de diciembre de 2025

A LA MANO

Acuse de Recibo

Hon. Lourdes L. Gómez Torres
Secretaria de Justicia
Departamento de Justicia de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico

Oficina Secretario
19DEC'25 9:31am
adc

Asunto: Consulta Legal sobre Contratación

Se incluye los siguientes documentos:

- Carta tramite sobre consulta legal
- Negociado de Energía – Resolución NEPR-MI-2024-0005
- Notificación de Resolución – Caso Núm. NI-DJ-2025-0026
- Requerimiento de Información – RFP-3PPO-0314-20-TPG2
- Contestación a Requerimiento de Información – RFP-3PPO-0314-20-TPG2

Ing. Mary C. Zapata Acosta
Directora Ejecutiva

AUTORIDAD DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
AEE
GOBIERNO DE PUERTO RICO

Mary C. Zapata Acosta
Directora Ejecutiva

18 de diciembre de 2025

Hon. Lourdes L. Gómez Torres
Secretaria de Justicia
Departamento de Justicia de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico

Honorable Secretaria:

Re.: Consulta legal sobre contratación con Power Expectations, LLC

La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (Autoridad) solicita una consulta al Departamento de Justicia (Departamento) en relación con la posibilidad de contratar con la entidad Power Expectations, LLC (Power), entidad seleccionada mediante un proceso competitivo, administrado por la Oficina de Compras de Terceros Independientes (3PPO, por sus siglas en inglés), sobre la adquisición de capacidad de generación temporera de 800 MW. Según se explica más adelante, la presente consulta se formula con el fin de asegurar que cualquier determinación relacionada con dicha contratación se adopte en estricto cumplimiento con el ordenamiento jurídico aplicable y el interés público.

La Autoridad es una corporación pública creada al amparo de la Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941, según enmendada, con la facultad de ejecutar contratos y formalizar los instrumentos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus fines públicos, incluyendo aquellos relacionados con la adquisición de capacidad de generación eléctrica, siempre en estricto cumplimiento con el ordenamiento jurídico aplicable, la política pública vigente y el interés público que rige su gestión.

La Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico, Ley Núm. 120-2018, según enmendada, enmendó, entre otras, la Ley Núm. 83-1941 y la Ley de Alianzas Público-Privadas, Ley Núm. 29-2009, según enmendada, a los fines de disponer que cualquier transacción de la Autoridad relacionada con funciones, servicios o instalaciones de ésta se lleve a cabo conforme al proceso establecido en la Ley Núm. 29-2009. Conforme a dicho marco legal, los procesos competitivos de estas transacciones son dirigidos y realizados por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), directamente o a través del 3PPO, según corresponda.[1]

La Autoridad procede a la revisión y validación de los informes y documentos vinculados a los contratos recomendados por la AAPP o el 3PPO. Una vez verificada la totalidad de los documentos e informes, dichos contratos son sometidos ante la Junta de Gobierno de la Autoridad (Junta de Gobierno), a fin de que esta emita la autorización para la firma del contrato o contratos resultantes del proceso competitivo. Con la autorización de la Junta de

[1] La Oficina de Compras de Terceros Independiente es activado por la AAPP para atender situaciones donde los operadores de la AEE pudieran tener conflicto directo o indirecto a través de sus compañías matrices.

Gobierno, la Autoridad somete los contratos recomendados, junto con el expediente íntegro de la Solicitud de Propuesta (RFP, por sus siglas en inglés), provisto por la AAPP y el 3PPO, según corresponda, para la evaluación y aprobación del Negociado de Energía. Obtenida la aprobación del Negociado, la Autoridad somete los contratos recomendados para la aprobación ulterior de la Junta de Supervisión y Administración Fiscal (FOMB, por sus siglas en inglés).

Con relación a los hechos objeto de la consulta, el proceso se inició el 19 de marzo de 2025, cuando el Negociado emitió una Resolución y Orden para que la Autoridad comenzara un procedimiento acelerado de adquisición de hasta 800 MW de generación temporera, dada la condición crítica del sistema eléctrico. Para atender la necesidad de generación de emergencia, se emitió el RFP 3PPO-0314-20-TPG. Como resultado de ese primer RFP, el 3PPO adjudicó la propuesta a la empresa Power.

La Autoridad sometió el 20 de junio de 2025 una Moción con el contrato propuesto resultante del RFP, lo que llevó a que el Negociado de Energía emitiera una Resolución el 4 de julio de 2025, en la cual dentro de sus facultades regulatorias, entendió que se podían obtener ciertos ahorros si se extendía el término del contrato, lo que tuvo el efecto de alterar sustancialmente los términos del RFP original, requiriendo su cancelación y la emisión de un nuevo RFP para cumplir con las directrices del regulador.

El 3PPO llevó a cabo el segundo proceso competitivo, en el cual adjudicó, sujeto al proceso de negociación y a las aprobaciones correspondientes, a tres entidades, incluyendo a Power. Conforme a la recomendación del 3PPO, la Junta de Gobierno autorizó el proceso de negociaciones con los proponentes seleccionados y la ejecución de aquellos contratos recomendados como resultado de dichas negociaciones. El 17 de noviembre de 2025, el 3PPO remitió a la Autoridad el borrador del contrato negociado con Power para su revisión. Tras evaluar la documentación correspondiente, el 26 de noviembre de 2025, la Autoridad sometió el contrato para la revisión y aprobación del Negociado. Posteriormente, el 11 de diciembre de 2025, el Negociado aprobó el contrato y ordenó su presentación ante la FOMB para la evaluación correspondiente.

Por otra parte, el 8 de diciembre de 2025, notificada el 11 de diciembre de 2025, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Panel sobre el FEI) emitió la Resolución en el caso NI-DJ-2025-006, mediante la cual determinó que no procedía ordenar una investigación preliminar respecto de una querella anónima presentada contra la Directora Ejecutiva de la Autoridad y el Director Ejecutivo de la AAPP. La querella alegaba, entre otros asuntos, la posible contratación de la entidad Power en contravención de la ley. De dicha Resolución surge que el presidente y agente residente de Power Expectations, LLC, el señor Eddie David Echevarría, fue convicto en el estado de Florida en el año 2015 por determinados delitos de violencia y resistencia a las autoridades de ley y orden. El Panel sobre el FEI concluyó que dichas convicciones no corresponden a delitos graves contra el ejercicio del cargo público, contra los fondos o la propiedad pública, ni a delitos tipificados en el Artículo 3.4 del Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, por lo que no activan una inhabilidad automática para contratar con el Gobierno de Puerto Rico.

No obstante, el propio Panel expresó que, aunque legalmente no procedía una investigación preliminar, las convicciones referidas son relevantes para la evaluación del riesgo, confiabilidad e idoneidad moral de cualquier entidad que pretenda contratar con el Estado, y

destacó una consideración adicional de política pública respecto a la suficiencia de los mecanismos actuales de contratación gubernamental.

De la revisión de los expedientes en el registro del Departamento de Estado, realizada el 12 de diciembre de 2025, se confirma que el señor Eddie David Echevarría continúa desempeñándose como presidente y agente residente de Power, corporación número 526265. Ante esta información, la Autoridad solicitó al 3PPO que reevaluara la viabilidad de Power como alternativa para ser contratada, conforme a la conclusión del Panel sobre el FEI respecto a la contratación con una compañía con el historial de Power. El 17 de diciembre de 2025, la Autoridad recibió la contestación del 3PPO, en la que mantuvo su recomendación de contratar con Power, al concluir que no concurrían los requisitos legales que impidieran dicha contratación.

Ante este cuadro fáctico, en el cual no existe una inhabilidad estatutaria automática para contratar, pero sí una advertencia expresa del Panel sobre el FEI sobre consideraciones de riesgo institucional e idoneidad, la Autoridad estima necesario solicitar una consulta al Departamento antes de tomar cualquier determinación relacionada con una posible contratación derivada del proceso competitivo antes descrito.

A la luz de lo anterior, la Autoridad solicita respetuosamente que el Departamento de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes interrogantes:

1. ¿Puede una corporación pública del Gobierno de Puerto Rico contratar válidamente con Power Expectations, LLC, considerando que su presidente y agente residente posee convicciones penales en otra jurisdicción por delitos que no activan una inhabilidad automática bajo el Artículo 3.4 del Código Anticorrupción?

2. ¿Tiene una agencia discreción legal para descualificar o abstenerse de contratar con una entidad privada, aun en ausencia de una inhabilidad estatutaria expresa, basándose en consideraciones de política pública, riesgo institucional, confiabilidad e idoneidad moral, como las destacadas por el Panel sobre el FEI?

3. En caso afirmativo, ¿cuáles serían los criterios o parámetros legales mínimos que una agencia debe observar para sustentar válidamente una determinación de esa naturaleza?

La presente consulta se formula en el ejercicio responsable de los deberes de la Autoridad y con el propósito de garantizar que toda actuación futura se ajuste estrictamente al marco legal aplicable, salvaguarde el interés público y mitigue riesgos indebidos para el Gobierno de Puerto Rico.

Agradecemos de antemano la atención prestada a este asunto y reiteramos nuestra disposición para proveer cualquier información adicional que estime necesaria.

Cordialmente,

Mary C. Zapata Acosta
Directora Ejecutiva

GOVERNMENT OF PUERTO RICO
PUBLIC SERVICE REGULATORY BOARD
PUERTO RICO ENERGY BUREAU

IN RE: ELECTRIC SYSTEM PRIORITY STABILIZATION PLAN	**CASE NO.: NEPR-MI-2024-0005** **SUBJECT:** PREPA's First Proposed Contract Resulting from Temporary Emergency Power Generation.

RESOLUTION AND ORDER

I. Relevant Background

Given the critical condition of Puerto Rico's electric system, through a Resolution and Order issued on March 19, 2025 ("March 19 Resolution"), the Energy Bureau of the Puerto Rico Public Service Regulatory Board ("Energy Bureau") ordered the Puerto Rico Electric Power Authority ("PREPA") to appear before the Public-Private Partnerships Authority ("P3A") and initiate the process of the Independent Third-Party Procurement Office ("3PPO") to begin the expedited procedure for the acquisition of up to 800 MW of temporary generation for eighteen (18) months. PREPA was directed to submit to the Energy Bureau, upon completion of the bidding process, the costs associated with each initiative so the Energy Bureau could assess whether such costs are prudent and reasonable.[1]

Before issuing the March 19 Resolution, the Energy Bureau had initiated efforts to develop a plan to stabilize the electric system in response to recurring major outages and grid instability events that took place in early June 2024.[2] As part of this proceeding, the Energy Bureau ordered LUMA,[3] PREPA, and Genera[4] to each develop an "aggressive preliminary plan of improvements to the electric system" with a maximum implementation period of two (2) years.[5] This proactive initiative required the identification and mitigation of all key factors contributing to the electric system's unreliability, including, but not limited to, outdated protection schemes, lack of system redundancy, inadequate vegetation management practices, insufficient reliable generation capacity, deficiencies in frequency and inertia control, and persistent triggers for load shedding. Each plan was to describe the proposed corrective measures, the associated costs, and the identified funding sources.[6] As part of the evaluation process of the plans submitted by LUMA, Genera, and PREPA, the Energy Bureau considered identified deficiencies in generation, as well as their effects on system operations and the proposed measures to address such deficiencies.

In determining the need to procure 800 MW of emergency generation, the Energy Bureau also considered the October 2024 Adequacy Report[7], which identified a generation shortfall of that magnitude.[8] In addition, a catastrophic failure at Aguirre Unit #1 occurred during the Energy

---

[1] March 19 Resolution.

[2] *See* Resolution and Order, *In re: Electric System Priority Stabilization Plan*, Case No.: NEPR-MI-2024-0005, June 13, 2025 ("June 13 Resolution").

[3] LUMA Energy, LLC, and LUMA Energy ServCo, LLC, (collectively, "LUMA").

[4] Genera PR, LLC ("Genera").

[5] *See* June 13 Resolution, p. 2.

[6] *Id.*

[7] *In re: LUMA Resource Adequacy Study*, Case No.: NEPR-MI-2022-0002, *Motion to Sumit LUMA's Fiscal Year 2025 Resource Adequacy Study*, Exhibit 1, *Puerto Rico Electrical System Resource Adequacy Analysis Report* filed by LUMA on October 31, 2024, ("October 2024 Adequacy Report").

[8] *See* October 2024 Adequacy Report, p. 13.

Bureau's evaluation process, further aggravating the shortfall.[9] This event was also considered by the Energy Bureau as part of the supporting facts justifying the request for 800 MW of emergency generation made through the March 19 Resolution.

Through a March 24, 2025 filing, LUMA submitted an Updated Resources Adequacy Report.[10] This report reaffirmed the need for the installation of 800 MW of temporary emergency generation and analyzes the impact of the catastrophic failure of Aguirre Unit #1.[11] Finally, it is worth highlighting that, on that same date, the Energy Bureau issued the Priority Stabilization Plan,[12] which also addresses the aforementioned matters.

On June 20, 2025, PREPA filed a document titled *Motion Submitting Proposed Contract Resulting from Temporary Emergency Power Generation RFP for the Energy Bureau's Review and Approval* ("June 20 Motion"), including as *Exhibit A* a proposed contract resulting from the competitive procurement process for temporary emergency power generation, and as *Exhibit B* a 3PPO report summarizing the procurement process and providing the rationale for the selection of the preferred proponent.

On June 27, 2025, the Energy Bureau issued a Resolution and Order requiring information and clarifications from PREPA regarding the June 20 Motion ("June 27 Resolution"). On July 1, 2025, PREPA filed a document titled Motion in Partial Compliance with the June 27 Resolution ("July 1 Motion"). Through this motion, PREPA submitted certain documents and information required by the June 27 Resolution.

On July 4, 2025, the Energy Bureau issued a Resolution and Order granting conditional approval to the proposed contract, subject to the parties agreeing to modify the proposed contract to allow for a longer term and reduced price ("July 4 Resolution"). The Energy Bureau required PREPA to renegotiate and resubmit the contract with materially revised terms, including reduced energy pricing capped at approximately $0.189/kWh for Aguirre and $0.203/kWh for Costa Sur.

Following the issuance of the July 4 Resolution, the procurement process did not proceed directly to a final executed contract. The solicitation process restarted under the revised regulatory parameters. Subsequently, on November 26, 2025, PREPA filed before the Energy Bureau a document titled *Motion Submitting the First Proposed Contract Resulting from Temporary Emergency Power Generation RFP for the Energy Bureau's Review and Approval and Memorandum of Law in Support of Request for Confidential Treatment* ("November 26 Motion"). In the November 26 Motion, PREPA represented that the filing constitutes the first proposed contract under the reopened procurement and corresponds to 400 MW of temporary emergency generation to be at the Aguirre Power Plant. PREPA further stated that the additional proposed contracts for the remaining 800 MW authorization will be submitted separately as negotiations conclude. PREPA also requested that Exhibits I and II to the November 26 Motion be granted confidential treatment until the evaluation process concludes and the final contract is executed, arguing such documentation contains ongoing deliberative material that forms part of an active negotiation process as part of a competitive procurement process.

---

[9] *See In re: Electric System Priority Stabilization Plan*, Case No.: NEPR-MI-2024-0005, *Motion Submitting LUMA's Position Regarding Genera's Request for Expedited Approval of Emergency Generation Capacity Solutions* filed by LUMA on March 6, 2025 ("March 6 Motion").

[10] *In re: LUMA Resource Adequacy Study*, Case No. NEPR-MI-2022-0002, *Motion to Submit Interim Update for Summer 2025 of LUMA's Fiscal Year 2025 Resource Adequacy Resource*, filed by LUMA on March 24, 2025 ("Updated Resources Adequacy Report").

[11] *Id.*, p. 16.

[12] See Resolution and Order, *In re: Electric System Priority Stabilization Plan*, Case No.: NEPR-MI-2024-0005, , March 28, 2025 ("Priority Stabilization Plan").

II. Analysis and Evaluation

A. Summary of Principal Terms of the Proposed Contract

The proposed Performance-Based Service Agreement submitted by PREPA provides for 400 MW of Continuous Operating Power ("COP") generation at the Aguirre site and/or the additional site, subject to the Power Availability requirements. As defined in the proposed contract "Additional Site" means the generation site proposed in the Municipality of Yabucoa, Puerto Rico, which may be incorporated into this Agreement upon review and approval by the Energy Bureau. The inclusion, activation, and use of the Additional Site shall not be effective unless and until the Energy Bureau's approval is obtained, and all related regulatory, technical, and operational requirements applicable to the Additional Site have been satisfied.

For the Aguirre Power Plant, the Seller shall procure all Liquefied Natural Gas ("LNG") required to operate the Temporary Power Generation Units. The Seller shall be responsible for LNG delivery, storage, regasification, associated infrastructure, and environmental and safety compliance. The Buyer may elect to operate the TM2500 units using diesel fuel. In such case, the Buyer shall supply the diesel fuel and its delivery infrastructure. When instructed by the Buyer, the Seller shall operate the generation units on diesel.

The proposed contract becomes effective upon execution by both Parties and shall remain in effect for a ten (10) year term beginning on the Commercial Operation Date ("COD") of the Facility at the Project Site.

Buyer's obligation is limited to paying for metered and accepted kilowatt-hours. The proposed contract imposes no minimum-take requirement, minimum-generation requirement, or make-whole payments.

The Seller is responsible for all infrastructure required to interconnect the generation systems at the 115 kV or 230 kV switchyards, including transformers, switchgear, auxiliary systems, and all associated equipment. The Seller shall obtain and maintain all permits and approvals necessary for installation, operation, environmental compliance, and interconnection.

The Seller is responsible for integrating its power generation system with the Buyer's transmission and dispatch network and shall comply with all applicable interconnection standards and protocols set by the Buyer and coordinated with LUMA as the T&D Operator. The Seller shall connect its system at the 115 kV and/or 230 kV switchyard at Aguirre and if applicable to the Additional Site shall operate and maintain all auxiliary facilities, including transformers, switchgear, and related equipment, in full working condition throughout the Performance Period. The Seller is responsible for all interconnection costs bared by the Seller and LUMA.

B. Evaluation Framework

i. Article 6.32 of Act 57-2014[13] and Regulation 8815[14]

Section 6.32 of Act 57-2014, as amended by Act 17-2019,[15] provides for the evaluation and approval of all agreements between electric power service companies, including independent power producers, before the execution thereof. Paragraph (d) of Section 6.32 provides that in evaluating every proposal for an agreement between electric power service companies, the Energy Bureau shall consider the IRP. The Energy Bureau shall not approve an agreement that is inconsistent with the IRP, particularly in all that pertains to renewable energy, distributed

---

[13] *Transformation and Energetic RELIEF Act of Puerto Rico*, as amended ("Act 57-2014").

[14] Joint Regulation for the Procurement, Evaluation, Selection, Negotiation and Award of Contracts for the Purchase of Energy and for the Procurement, Evaluation, Selection, Negotiation and Award Process for the Modernization of the Generation Fleet, November 9, 2016 ("Regulation No. 8815").

[15] *The Puerto Rico Energy Public Policy Act* ("Act 17-2019").

generation, conservation and efficiency goals established in the integrated resource plan as well as in the Energy Public Policy.[16] In addition, Paragraph (e) of Section 6.32 provides a timeframe for the review and evaluation of PREPA's agreements.

PREPA is facing a critical situation resulting from a shortage of generation resources. There remains significant uncertainty in the availability of sufficient capacity in the coming months. Absent immediate action by the Energy Bureau, this emergency is likely to worsen during the peak demand season, which has begun. PREPA anticipates a base load generation shortfall exceeding 800 MW if the generation resources contemplated under the proposed contract are not available and no mitigating measures are implemented.

Under these circumstances, and in light of Article 6.32 of Act 57-2014 with respect to ensuring that the proposed contract is consistent with the Approved IRP and subject to an expedited evaluation process, the Energy Bureau **DETERMINES** that an expedited evaluation is warranted. Such evaluation, conducted under the principles listed in Regulation 8815 and Article 6.32 of Act 57-2014, is justified given the emergency circumstances surrounding this matter.

ii. Compliance with Approved IRP[17]

An Integrated Resources Plan ("IRP") considers all reasonable resources needed to supply demand over the planning horizon, which in our case is twenty (20) years. Therefore, using temporary emergency generation due to unexpected or emergency situations is not normally considered a resource planning action in an IRP. Due to its temporary nature, actions that may result from unexpected situations or emergencies, such as the one contemplated by PREPA in the proposed contract and validated by the Energy Bureau through the March 19 Resolution, were not specifically identified as a resource planning action during the evaluation of the Approved IRP. The IRP should identify the permanent resources needed to supply demand over the planning horizon, at least cost. All permanent resources are assumed to be available to provide service.

If certain assets are not available due to a prolonged emergency, the effect this loss can have on the system could be detrimental to the point of compromising service reliability. Under certain circumstances, the acquisition or development of a temporary resource to supply a need that arises as the result of an emergency not contemplated in the IRP analysis, could be considered as consistent with such IRP. For example, the temporary acquisition of a generation asset (e.g., by purchase or lease) to make up for the temporary loss of permanent assets due to unforeseen circumstances could be considered one such situation. In these circumstances, the analysis regarding consistency should include, at least, (1) if the permanent assets are part of the identified resources on the IRP, (2) the effect the loss of the assets have on the system, (3) the time the temporary asset would be in service (i.e. the temporary nature of such asset), and (4) the purpose of the acquisition of the temporary asset is to temporary replace, in total or in part, the permanent asset.

iii. Act 1-2025[18]

As required by Act 57-2014, on July 12, 2023, the Energy Bureau initiated a new Integrated Resource Plan (IRP) process to update the previously approved IRP. This update is mandated by law to account for changes in available resources and to reflect updated circumstances and

[16] *See* in general, Section 1.5 of Act 17-2019, where the general statements of "Energy Public Policy 2050" of Puerto Rico are enunciated.

[17] Final Resolution and Order on the Puerto Rico Electric Power Authority's Integrated Resource Plan, In re. Review of the Puerto Rico Electric Power Authority Integrated Resource Plan, Case No. CEPR-AP-2018-0001, August 24, 2020 ("Approved IRP"). Minor modifications and/or clarifications to the Approved IRP were introduced through a Resolution and Order on Reconsiderations issued by the Energy Bureau on December 2, 2020, in case: In re. Review of the Puerto Rico Electric Power Authority Integrated Resource Plan, Case No. CEPR-AP-2018-0001.

[18] Act No. 1 of March 12, 2025 ("Act 1-2025").

conditions affecting the electric system, thereby ensuring that Puerto Rico's long-term energy planning remains aligned with current realities and future needs. As part of this process, LUMA submitted the First Interim 2025 IRP Filing before the Energy Bureau on November 25, 2024. The IRP process is ongoing, with further evaluations and stakeholder engagements planned to ensure a sustainable and reliable energy future for the island.

Pending the evaluation of the updated IRP, House Bill 267 has been enacted into law ("Act 1-2025"), amending Puerto Rico's Public Energy Policy Act ("Act 17-2019") and the Energy Diversification Act, as amended ("Act 82- 2010"). Act No. 1-2025 extends the lawful use of coal-based power generation through the year 2032, which may permit the continued operation of the AES[19] power plant in Guayama beyond its previously anticipated retirement date of December 2027. Additionally, Act No. 1-2025 eliminated the interim renewable energy targets of 40% by 2025 and 60% by 2040, while retaining the statutory objective of achieving 100% renewable energy generation by 2050.

These legislative amendments modify the energy transition goals to better align with current energy system conditions and to ensure continued system reliability. They allow, during a transitional period, the integration of other generation resources into the system, not necessarily based on renewable energy sources, provided that such integration supports the achievement of the 100% renewable energy goal by the year 2050, and that such resources are procured at competitive prices that can compete with renewable energy alternatives. Act 1-2025 also includes provisions to enhance energy efficiency and promote the integration of renewable energy sources into the grid.

Consistent with Act 1-2025, on March 19,2025 the Energy Bureau issued a Resolution and Order[20] in which it determined that: (i) given the pattern of forced outages of PREPA's existing, aging, thermal generation fleet, the available generation capacity is limited and may complicate needed maintenance and repairs to the existing fleet; (ii) there is a need to explore the costs and timeframe of availability of new, modern, generation sources that will allow Puerto Rico to reach the goals set in the new energy public policy and serve the electricity customers' best interests; and (iii) this procurement effort shall explore 2,500 to 3,000MW of new capacity. While perhaps the Energy Bureau's directive for the procurement of new generation, as stated in the March 19 Resolution – New Capacity, is not entirely consistent with the Approved IRP, such directive falls within the Energy Bureau's delegated authority to establish energy public policy and to issue determinations in furtherance thereof. This is true given that the decision is aligned with the provisions and policy objectives established under Act No. 1-2025, which directly affects and bears on the mandates set forth in the Approved IRP. The Energy Bureau has the power and duty to oversee and ensure the execution and implementation of the public policy on the electric power service in Puerto Rico,[21] to establish and implement regulations and the regulatory actions to guarantee the capacity, reliability, safety, efficiency, and reasonability of the rates of Puerto Rico's electrical system, and to establish the guidelines, standards, practices, and processes to be followed to purchase power, modernize power plants or electric power generation facilities.[22] It has the power to formulate and implement strategies to achieve the energy public policy goals, including, but not limited to, attaining the goals established in the Renewable Portfolio Standard and promoting the storage of energy.[23] The Energy Bureau has broad authority under Act 57-2014, Act 82-2010[24] and Act 17-2019 to oversee the acquisition of energy resources by PREPA to help ensure that the Energy Public Policy goals are met and that PREPA's ratepayers' interests are protected.

---

[19] AES Puerto Rico, Inc. ("AES").

[20] *See* Resolution and Order, *In re: Competitive Procurement or New Generation*, Case No.: NEPR-MI-2025-0001, March 19, 2025 ("March 19 Resolution-New Capacity").

[21] Act 57 2014 Article 6.3(a).

[22] *Id.*, Article 6.3(c).

[23] *Id.*, Article 6.3(f).

[24] *Puerto Rico Energy Diversification Policy through Sustainable and Alternative Renewable Energy Act*, as amended, ("Act 82-2010").

NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO
NEPR

C. Proposed Contract Evaluation

(i) Consistency with Approved IRP

The emergency generation resources contemplated in the proposed contract are not included in the Approved IRP, as temporary resources of this nature are rarely identified through the IRP resource planning process. However, given the temporary and emergency nature of the proposed generation and considering that its purpose is to address an unforeseen and urgent shortfall resulting from the unavailability of permanent assets, the Energy Bureau **CONCLUDES** that the proposed contract follows the Approved IRP.[25]

(ii) Pricing Terms

The prices established in the proposed contract arise from a procurement process conducted by the 3PPO under an RFP, which was not reviewed by the Energy Bureau before its execution. However, based on the report submitted and the proposals received -as evaluated by the Energy Bureau through PREPA's responses to the Energy Bureau's requests for information- it appears that, in general, the 3PPO followed standard procedures securing competitive pricing. The prices obtained through the proposed contract are deemed reasonable. The pricing associated with the proposed contract is contained in a confidential exhibit filed under seal with the November 26 Motion and is therefore not disclosed in this Resolution and Order.

The Energy Bureau acknowledges the 3PPO's[26] clarification that the pricing values referenced in the July 4 Resolution ($0.189/kWh for Aguirre and $0.203/kWh for Costa Sur) reflected an earlier proposal scenario structured under an 8,000-hour minimum annual dispatch assumption. Although proponents subsequently removed this assumption, the procurement record presented before the Energy Bureau did not clearly differentiate the preliminary dispatch-based pricing from the updated scenario, and the Energy Bureau reasonably relied on the information PREPA placed before it. The July 4 Resolution benchmarks represented sound regulatory reference points based on the evidence then available. The updated pricing submitted through the November 26 Motion, is therefore evaluated under the evolved procurement record, which excludes the dispatch guarantee. Because the proponents earlier lower pricing assumed a guaranteed 8,000 hours of annual dispatch, the removal of that guarantee necessarily increased the per-kWh price, since the seller must now recover fixed and operating costs over a smaller and uncertain volume of energy. By eliminating the 8,000 hours minimum dispatch guarantee, the ratepayers avoid any obligation to pay for energy they do not need, ensuring they only pay for actual energy delivered.

(iii) Proposed Contract Term

As previously discussed, for purposes of an IRP, a temporary activity is generally defined as one that does not involve prolonged use. Based on the current condition and generation deficiency of Puerto Rico's electrical system, the proposed ten (10) year term is deemed as temporary. This is true when considering the extended timeframes typically required to develop and implement permanent fossil generation projects. These circumstances reasonably extend what may be considered a "temporary" period under an IRP framework.

On the other hand, the Energy Bureau based on prevailing electric system conditions and the public policy changes introduced under Act 1-2025, found it necessary to require that the P3A procure up to 3,000 MW of generation capacity, which may be fulfilled through any type of generation resource, provided it results from a competitive process and is offered at reasonable prices. This includes, but is not limited to, generation based on natural gas or

---

[25] As discussed further below, even under circumstances in which the use of the assets proposed in the proposed contract may extend beyond what is typically expected for a temporary or emergency situation, under the provisions of the Energy Public Policy adopted through Act 1-2025, the proposed contract is still considered consistent and does not result in an insurmountable incompatibility with the Approved IRP.

[26] *In re: Electric System Priority Stabilization Plan*, Case No.: NEPR-MI-2024-0005, *Motion In Compliance with October 10, 2025 Resolution and Order and Memorandum of Law In Support of Request for Confidential Treatment*, Exhibit 1, filed by PREPA on October 15, 2025.

renewable energy sources. It is further recognized that the legislative amendments enacted under Act 1-2025 have, to some extent, affected or influenced the Approved IRP.

Considering these circumstances, and given the critical state of the electrical system, the Energy Bureau finds that a term of up to ten (10) years is not inconsistent with Puerto Rico's energy public policy or with the Energy Bureau's directive set forth in the March 19 Resolution–New Capacity, provided that such extension proves beneficial to ratepayers. It must be considered that this type of generation peaking unit supports the integration of renewable energy resources, as they can be made available during periods of renewable generation intermittency. Therefore, under the current context, the Energy Bureau concludes that it is consistent with the Energy Public Policy to authorize the proposed contract for a term of up to ten (10) years, as long as the terms remain favorable to ratepayers.

(iv) Interconnection

The parties propose to utilize the existing interconnection infrastructure at Aguirre, expecting to reduce the extent of interconnection work timeline and costs. The parties intend to integrate the proposed temporary generation using the existing transmission infrastructure at Aguirre. In addition, the design and construction of all interconnections related infrastructure shall comply with all applicable industry standards, as well as any technical requirements reasonably established by LUMA. Given this, the Energy Bureau deems that the interconnection of the proposed generation does not threaten the reliability or security of the electric grid and confirms that no terms or conditions in the proposed contract are contrary to -or undermine- the safe and reliable operation of the system.

The Energy Bureau **UNDERSCORES** that it is not, and has never been, a party to the contractual negotiations at issue. The Energy Bureau does not direct, supervise, or participate in the negotiation of the terms agreed upon between the parties, nor does it assume responsibility for the commercial strategy, policy determinations, or risk-allocation decisions inherent to those negotiations. The responsibility for negotiating a contract that reflects sound governmental judgment and advances the objectives and interests entrusted to P3A lies exclusively with the governmental negotiator, whose scope of evaluation encompasses various operational, financial, policy, and strategic considerations outside the jurisdiction of the Energy Bureau.

The Energy Bureau further emphasizes that its role is not to second-guess or replicate the bargaining process, nor to substitute its discretion for that of the governmental entity that negotiated the agreement (P3A). Instead, the Energy Bureau's authority is strictly limited to determining whether the submitted contract complies with applicable regulatory requirements, supports just and reasonable rates, and aligns with the statutory mandate to ensure that utility services remain reliable, affordable, and consistent with the public interest. It must be clearly understood that the proceeding before the Energy Bureau is not a negotiation of the contract, but a regulatory review focused solely on ensuring adherence to the legal and regulatory framework governing public utilities.

However, the Energy Bureau notes that, to the extent that a policy-based decision embedded in the negotiated agreement would (i) adversely affect the public interest, (ii) undermine the Energy Bureau's ability to fulfill its statutory duties, or (iii) result in unjust, unreasonable, or discriminatory outcomes for ratepayers, the Energy Bureau may require modifications or conditions to ensure compliance with applicable regulatory standards. In such limited circumstances, the Energy Bureau is justified in addressing those contractual elements, even if they stem from broader governmental policy judgments, solely to the extent necessary to prevent detriment to ratepayers and to protect the integrity of the regulatory framework.

III. Conclusion

After evaluating the proposed contract and the supporting documentation submitted by PREPA, the Energy Bureau **DETERMINES** its terms and conditions are prudent and reasonable and align with the public interest. The Energy Bureau **APPROVES** the First Proposed Contract as presented in the November 26 Motion.

The Energy Bureau **NOTES** that, within the procurement process, the proponent to the First Proposed Contract represented its ability to provide approximately 201 MW of supplemental capacity at the Costa Sur site, in addition to the 400 MW proposed for Aguirre. At this stage, the Energy Bureau **approves the 400 MW** reflected in the proposed contract to be installed at Aguirre. However, consistent with the stated need for up to 800 MW, if upon conclusion of the procurement process, the 3PPO determines that the remaining proponents do not submit pricing terms that are more favorable to ratepayers than the approved herein, the 3PPO may designate the proponent under this First Proposed Contract to supply the additional capacity **under the same terms and conditions approved in this Resolution and Order.** The Energy Bureau **CLARIFIES** that, consistent with the procurement, the Costa Sur site is already an authorized location under scope of the competitive process. Therefore, should PREPA and the proponent to the First Proposed Contract later proceed with approximately 201 MW contemplated for Costa Sur, no additional substantive approval from the Energy Bureau shall be required. Notwithstanding, PREPA shall submit before the Energy Bureau the corresponding contractual amendment under the same terms and conditions approved in this Resolution and Order, for ministerial confirmation, without the need for further substantive approval by the Energy Bureau.

However, **any capacity beyond the Aguirre and Costa Sur** sites shall require a separate filing **and approval** by the Energy Bureau. The Energy Bureau **CLARIFIES** that the scope of the procurement process pertains exclusively to the installation of temporary emergency generation at the Aguirre and Costa Sur site. Nothing in this Resolution and Order shall be construed as authorizing installation or operations of temporary generation at any additional or alternative site. Should the proponent seek to locate any portions of the temporary generation capacity at a site other than Aguirre or Costa Sur, and as required in the contract, PREPA must file the corresponding proposal for separate review and approval by the Energy Bureau.

The Energy Bureau **GRANTS** confidential designation and treatment to Exhibits I and II to the November 26 Motion.

The Energy Bureau **ORDERS** PREPA to file **immediately** the approved amendment with the Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico ("FOMB") for its review and approval. Any further amendments require the prior approval of the Energy Bureau.

The Energy Bureau **WARNS** PREPA that, in accordance Art. 6.36 of Act 57-2014:

(i) noncompliance with this Resolution and Order, regulations and/or applicable laws may carry the imposition of fines and administrative sanctions of up to one hundred twenty-five thousand dollars ($125,000) per day; and

(ii) for any recurrence of non-compliance or violation, the established penalty shall increase to a fine of not less than fifteen thousand dollars ($15,000) nor greater than two hundred fifty thousand dollars ($250,000), at the discretion of the Energy Bureau.

Be it notified and published.

Edison Avilés Deliz
Chairman

Lillian Mateo Santos
Associate Commissioner

Ferdinand A. Ramos Soegaard
Associate Commissioner

Sylvia B. Ugarte Araujo
Associate Commissioner

Antonio Torres Miranda
Associate Commissioner

CERTIFICATION

I certify that the majority of the members of the Puerto Rico Energy Bureau has so agreed on December 11, 2025. I also certify that on December 11, 2025 I proceeded with filing the Resolution and a copy was notified by electronic mail to alexis.rivera@prepa.pr.gov; nzayas@gmlex.net; mvalle@gmlex.net; rcruzfranqui@gmlex.net; lrn@roman-negron.com; legal@genera-pr.com; regulatory@genera-pr.com; RegulatoryPREBorders@lumapr.com; emmanuel.porrogonzalez@us.dlapiper.com; laura.rozas@us.dlapiper.com; margarita.mercado@us.dlapiper.com.

I sign this in San Juan, Puerto Rico, on December 11, 2025.

Wanda I. Cordero Morales
Interim Clerk

Gobierno de Puerto Rico
PANEL SOBRE EL FISCAL ESPECIAL INDEPENDIENTE
P. O. Box 9023351, San Juan, Puerto Rico 00902-3351
Edif. Mercantil Plaza, Ave. Ponce de León, Ofic. 1000
Hato Rey, PR 00918
Tels. (787) 722-1035 o (787) 722-1037

IN RE: **JOSUÉ COLÓN ORTIZ** DIRECTOR AUTORIDAD PARA LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS (AAPP) **MARICARMEN ZAPATA ACOSTA** DIRECTORA EJECUTIVA AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA (AEE)	CASO NÚM.: **NI-DJ-2025-0026** SOBRE: **NO INVESTIGACIÓN**

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN

CERTIFICO QUE EL 8 DE DICIEMBRE DE 2025, EL PANEL SOBRE EL FISCAL ESPECIAL INDEPENDIENTE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN QUE SE ACOMPAÑA. CERTIFICO ADEMÁS QUE, EN ESTA MISMA FECHA, HE ARCHIVADO EN AUTOS EL ORIGINAL DE ESTA RESOLUCIÓN Y NOTIFICADO CON COPIA DE LA MISMA A:

HON. LOURDES L. GÓMEZ TORRES
SECRETARIA
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
SAN JUAN, PUERTO RICO 00902-0192

LCDA. SONIA I. MARTÍNEZ ORTIZ
DIRECTORA
DIVISIÓN DE INTEGRIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CONTRALOR
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
SAN JUAN, PUERTO RICO 00902-0192

ING. JOSUE A. COLÓN ORTIZ
DIRECTOR
AUTORIDAD PARA LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS (AAPP)
PO BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

ING. MARICARMEN ZAPATA ACOSTA
DIRECTORA EJECUTIVA
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PO BOX 364267
SAN JUAN, PUERTO RICO 00936-4267

EN SAN JUAN, PUERTO RICO, HOY, 11 DE DICIEMBRE DE 2025.

PANEL SOBRE EL FISCAL ESPECIAL INDEPENDIENTE

B. Vega Z.

BRENDA VEGA ZAMBRANA
SECRETARIA DEL PFEI

Gobierno de Puerto Rico
PANEL SOBRE EL FISCAL ESPECIAL INDEPENDIENTE
P. O. Box 9023351, San Juan, Puerto Rico 00902-3351
Edif. Mercantil Plaza, Ave. Ponce de León, Ofic. 1000
Hato Rey, PR 00918
Tels. (787) 722-1035 o (787) 722-1037

IN RE: **JOSUÉ COLÓN ORTIZ** DIRECTOR AUTORIDAD PARA LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS (AAPP) **MARICARMEN ZAPATA ACOSTA** DIRECTORA EJECUTIVA AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA (AEE)	CASO NÚM.: **NI-DJ-2025-0026** SOBRE: **NO INVESTIGACIÓN**

RESOLUCIÓN

El día 17 de julio de 2025, el Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR), notificó al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente que no iniciaría una investigación preliminar relacionada con una querella anónima recibida el 25 de junio de 2025, la cual contiene alegaciones en contra del Ingeniero Josué Colón Ortiz, Director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y de la Ingeniero Maricarmen Zapata Acosta, Directora Ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica, en el Caso Núm. 2025-31-102-00053. Ello, a tenor de las disposiciones del Artículo 8 (3) y (4) de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, conocida como, *Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI)*, por considerar que, de la información recibida, no existen los criterios para comenzar una investigación preliminar.

El mencionado Artículo 8 dispone que, en todo caso en que la Secretaria o el Secretario de Justicia reciba una querella de cualquier fuente, imputando alguna violación a un empleado, funcionario, ex empleado o ex funcionario cubiertos por la mencionada ley, notificará al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) de tal querella y de la investigación que ha de conducir en un término que no excederá de quince (15) días laborables, contados a partir de la fecha en que se recibe la información o querella.

Por su parte, el Artículo 4 (1) de la referida ley, establece que la Secretaria o el Secretario de Justicia llevará a cabo una investigación preliminar en todo caso en que obtenga información bajo juramento que, a su juicio, constituya causa suficiente para investigar si se ha cometido cualquier delito grave y menos

grave y los delitos contra los derechos civiles, la función pública y el erario, por parte de los jefes de agencias, entre otros funcionarios.

La querella anónima fue referida a la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC). De la evaluación realizada por la DIPAC, surge que la misma alerta sobre la posibilidad de la contratación de la compañía Power Expectation para energía temporera. Se indica, que esta compañía, recién creada, es dirigida por un convicto de Florida, cuyo nombre es Eddie David Echevarría. La notificación vino acompañada por un documento titulado "Criminal & Traffic Records" que contiene información del Estado de Florida relacionada con el señor Echevarría. Surge del referido documento, que éste fue declarado convicto el 7 de diciembre de 2015, por delitos graves y menos graves, tales como:

(1) "Resisting Officer with Violence (843.01)"

(2) "Corruption by Threat (838.021.3B"

(3) "Battery on Law Enforcement Officer (784.07.2B)"

(4) "Resisting Officer Without Violence (843.02)"

(5) "Assault on Law Enforcement Officer (784.07.2A)"

(6) "Driving with Licence Suspended (322.34.10B2)"

Como parte del análisis y evaluación de esta querella, la DIPAC solicitó información al Departamento de Estado sobre la corporación Power Expectation LLC. También se le requirió información a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Adicionalmente, se emitió un requerimiento al Departamento de Justicia del Estado de Florida para que proveyera el récord criminal de Eddie David Echevarría. A la fecha de la comunicación cursada al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, el expediente criminal del Estado de Florida no había sido provisto a la DIPAC, ya que se necesitaba más información personal del señor Echevarría. Cabe señalar que el documento o querella fue enviado en un sobre con dirección del remitente en el número 206 de la Avenida De la Constitución, San Juan, Puerto Rico, con

código postal 00901. De la búsqueda realizada en el Registro Criminal Integrado (RCI) del DJPR no se obtuvieron resultados con el nombre de Eddie David Echevarría.

Con posterioridad al recibo de la documentación requerida, fueron analizados diversos artículos de la Ley 146-2012, conocida como, *Código Penal de Puerto Rico de 2012*; de la Ley 1-2012, conocida como, *Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental;* de la Ley 8-2017, conocida como, *Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico* y, de la Ley 2-2018, conocida como, *Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico.* Además del análisis de la información obtenida, se evaluó el derecho aplicable al asunto planteado en la querella.

De la prueba documental surge que el Sr. Eddie David Echevarría es el agente residente y presidente de Power Expectation LLC, una corporación activa desde el 20 de septiembre de 2023, con número de registro 516265. Se expone por la DIPAC que del documento provisto con la querella se observa que los delitos por los que fue hallado convicto el señor Echevarría, no son delitos graves contra el ejercicio del cargo público, ni contra los fondos o propiedad pública.

Según la DIPAC, la querella anónima presentada carece de tres (3) elementos que les lleven a concluir que los dos funcionarios referidos hayan incumplido con los deberes y responsabilidades de las funciones inherentes a sus cargos o que hayan estado involucrados en la selección del contratista. Conforme fue certificado por la AAPP, el proceso competitivo bajo el *Request for Proposal* (RFP), 3PPO-0314-20-TPG, lo llevó a cabo la Oficina de Compra de Terceros Independientes (conocida por sus siglas en inglés como 3PPO).

Además, la 3PPO certificó que, como parte de un proceso de impugnación al RFP realizado para la compra temporera de energía, el Tribunal de Apelaciones ordenó que se llevara a efecto un nuevo proceso de licitación y la cancelación de cualquier proceso contractual con Power Expectation, hasta tanto se finalice dicho proceso. Hasta donde la DIPAC pudo comprobar, no parece haberse

celebrado ningún contrato con Power Expectation ni con otra parte bajo el marco original del RFP.

Por otro lado, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) certificó que el proceso competitivo bajo el cual Power Expectation, LLC, fue el licitador agraciado lo llevó a cabo la 3PPO. Debido a ésto, la AEE no tiene bajo su custodia el expediente del proceso competitivo ni copia de contratos o enmiendas otorgados con Power Expectation, LLC. Tras analizar la prueba recopilada durante las gestiones investigativas, la DIPAC considera que la información recibida no constituye causa suficiente para iniciar una investigación preliminar. Ante ello, en cumplimiento con las disposiciones de los artículos 4 (6) y 8, de la Ley Núm. 2, *supra*, informa que no se cumplen los requisitos establecidos en dicha disposición legal para iniciar una investigación preliminar en contra del Ing. Josué Colón Ortiz y la Ing. Maricarmen Zapata Acosta, en relación con los hechos alegados. Junto a dicha notificación se anejó el expediente de la investigación realizada.

En resumen, quedó constatado que el DJPR recibió la querella anónima que nos ocupa, el 25 de junio de 2025, alegando la posible contratación de Power Expectation, LLC, corporación dirigida por Eddie David Echevarría, convicto en el estado de la Florida por delitos de violencia contra agentes y otros delitos, no vinculados al mal uso de fondos públicos. De dicha querella no surge, ni de la evidencia recopilada por la DIPAC, ningún hecho que vincule directamente al Ing. Josué Colón Ortiz o a la Ing. Maricarmen Zapata Acosta con la selección de la corporación o con procesos de contratación. Por otra parte, la AAPP y la AEE certificaron negativamente que no existen contratos, enmiendas, facturas ni desembolsos a favor de Power Expectation, LLC.

De otra parte, el proceso competitivo bajo el RFP 3PPO-0314-20-TPG, fue conducido por la 3PPO, no por los funcionarios querellados. Por su parte, el Tribunal de Apelaciones paralizó todo proceso contractual y el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) ordenó reabrir el proceso competitivo, por lo que

no existe contrato vigente con Power Expectation, LLC. Del expediente corporativo del Departamento de Estado no surge información que vincule la entidad o sus administradores a delitos que constituyan inhabilidad automática bajo el Art. 3.4 del Código Anticorrupción.

Finalmente, la DIPAC concluyó que la querella carece de los elementos mínimos establecidos en la Ley Núm. 2-1988, *supra*, para iniciar una investigación preliminar.

En cuanto al derecho aplicable, el *Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico*, en su Artículo 3.4, dispone, en lo que respecta a la inhabilidad para contratar con el Gobierno, que cualquier persona, sea natural o jurídica, que haya sido convicta por infracción a los artículos 4.2, 4.3 o 5.7 de la *Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental*, *supra*, por infracción a alguno de los delitos graves contra el ejercicio del cargo público o contra los fondos públicos de los contenidos en los artículos 250 al 266 de Código Penal de Puerto Rico, por cualquiera de los delitos tipificados en el Código Anticorrupción o por cualquier otro delito grave que involucre el mal uso de los fondos o propiedad pública, incluyendo sin limitarse, a los delitos mencionados en la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, *supra*, estará inhabilitada de contratar o licitar con cualquier agencia ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico por el término aplicable bajo dicho Artículo.

De otra parte, cuando no se disponga un término, la persona quedará inhabilitada por diez (10) años, contados a partir de la fecha en que termine de cumplir la sentencia. Todo contrato vigente será rescindido de manera inmediata de advenir durante su vigencia una convicción por cualquiera de los delitos establecidos en las disposiciones mencionadas en el párrafo anterior.

Además, todo contrato deberá incluir una cláusula de rescisión en caso de que la persona que contrate con las agencias ejecutivas resultare convicta, en cualquier jurisdicción local o federal, por alguno de los delitos que le inhabilitan para contratar, según lo dispuesto en el mencionado estatuto. Se dispone

también, que en los contratos se certificará que la persona no ha sido convicta, en la jurisdicción local o federal, por ninguno de los delitos antes dispuestos. El deber de informar será de naturaleza continua durante todas las etapas de contratación y ejecución del contrato.

Se requiere que las agencias ejecutivas que tengan la obligación de rescindir un contrato al amparo de lo establecido en esta Ley deberán aprobar un plan de transición y contingencia para asegurar la continuidad de servicios esenciales.

Sin embargo, aunque las limitaciones establecidas en el Artículo 3.4 del Código Anticorrupción se activan únicamente ante convicciones por delitos graves contra el ejercicio del cargo público, contra fondos o propiedad pública, o por delitos relacionados al mal uso de recursos públicos, surge una consideración adicional de política pública que merece ser destacada.

En Puerto Rico, existen múltiples disposiciones legales, reglamentarias y prácticas administrativas que exigen a los funcionarios públicos, y a gran parte del personal regular del Gobierno, la presentación de una certificación negativa de antecedentes penales como requisito de empleo. Esto es especialmente estricto en los casos de funcionarios cuyo nombramiento requiere el consejo y consentimiento de los cuerpos legislativos, para quienes la transparencia, la honradez y la credibilidad institucional son criterios indispensables para acceder al cargo.

Del mismo modo, resulta habitual que entidades públicas, administraciones municipales, corporaciones públicas y agencias, exijan a sus empleados y candidatos a empleo no tener ningún tipo de antecedente penal, aun cuando los delitos no estén vinculados al mal uso de fondos públicos. La razón estriba en que la relación de confianza entre el Estado y los ciudadanos requiere que el personal gubernamental, independientemente de su rango, cumpla con los más altos estándares de idoneidad moral.

A diferencia de estos requisitos estrictos para funcionarios y empleados, la ley no exige que un contratista del Gobierno carezca de toda clase de convicción penal, sino únicamente de aquellas expresamente enumeradas en el Artículo 3.4, relacionadas exclusivamente con delitos de corrupción, malversación o violaciones éticas de naturaleza pública.

No obstante, el asunto planteado por la querella, respecto a que el presidente y agente residente de Power Expectation, LLC, posee convicciones previas en el estado de la Florida por delitos violentos (según la información extraoficial obtenida) expone una realidad no deseable. Se plantea que un ciudadano con historial penal significativo, aunque no relacionado con la corrupción pública, pudiera legalmente ser considerado para un contrato gubernamental, aun cuando a un empleado público regular no se le permitiría ocupar un puesto bajo las mismas circunstancias. Esto resalta una brecha normativa entre los estándares éticos que se exigen a los servidores públicos, y las normas más limitadas aplicables a empresas y contratistas que realizan negocios con el Estado.

Aunque del récord surge que el señor Echevarría no posee antecedentes penales en la jurisdicción de Puerto Rico, la información provista en la querella y corroborada parcialmente por documentos preliminares remitidos por el Departamento de Justicia del Estado de la Florida, sugiere la existencia de convicciones por delitos de violencia y resistencia a la autoridad, que aunque no activan automáticamente la inhabilitación del Artículo 3.4, son relevantes para la evaluación del riesgo, confiabilidad e idoneidad moral de cualquier entidad que pretenda contratar con el Estado. No podemos ignorar que la ausencia de un requisito legal amplio para evaluar el historial penal general de los contratistas puede exponer al Gobierno a riesgos indebidos, especialmente en contratos de alta cuantía, urgencia o impacto público.

Por consiguiente, aunque estamos de acuerdo en que legalmente no procede una investigación preliminar en este caso, la situación observada invita

a reflexionar sobre la suficiencia de los mecanismos actuales de licitación y sobre la necesidad de considerar, desde la Legislatura o agencias reglamentadoras, si debe implantarse un estándar más uniforme que equipare los requisitos de integridad exigidos a funcionarios y empleados, con los que aplican a contratistas del Gobierno.

Hemos evaluado cuidadosamente la totalidad del expediente y coincidimos plenamente en que no se satisfacen los requisitos de ley para ordenar una investigación preliminar en contra de los ingenieros Josué Colón Ortiz y Maricarmen Zapata Acosta. Ello, por no surgir elemento de participación alguno en forma indebida por parte de estos funcionarios.

Por todo lo antes expuesto, este Panel se da por enterado de la notificación del DJPR de no realizar una investigación en el presente asunto.

NOTIFÍQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, hoy, 8 de diciembre de 2025.

Ygrí Rivera Sánchez
Presidenta del PFEI

Rubén Vélez Torres
Miembro en Propiedad del PFEI

Leila Rolón Henrique
Miembro en Propiedad del PFEI

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

AEE

GOBIERNO DE PUERTO RICO

Mary C. Zapata Acosta
Directora Ejecutiva

12 de diciembre de 2025

VIA CORREO ELECTRÓNICO
ocarlo@carlolaw.com

Lcdo. Osvaldo Carlo
Oficina de Compras de Terceros Independiente
Regulatory Compliance Services, Corp.
American Airlines Building
1509 López Landrón PH
San Juan, PR 00911

Estimado licenciado Carlo:

Re.: Requerimiento de Información sobre RFP 3PPO-0314-20-TPG2

El 8 de diciembre de 2025, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI) emitió una Resolución en el Caso Núm. NI-DJ-2025-006. En dicho procedimiento figuran como demandados Josué A. Colón Ortiz, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), y Mary C. Zapata Acosta, directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (Autoridad). La acción se originó a raíz de una querella anónima presentada contra ambos funcionarios.

La querella anónima contenía las siguientes alegaciones:

> La querella anónima, referida a la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), advierte sobre la posible contratación de la compañía *Power Expectations* para proveer energía temporera. Se señala que dicha compañía, de reciente creación, está dirigida por Eddie David Echevarría, convicto en el estado de Florida. La notificación fue acompañada por un documento titulado *"Criminal & Traffic Records"*, el cual contiene información oficial del Estado de Florida relacionada con el señor Echevarría. De dicho documento surge que éste fue declarado convicto el 7 de diciembre de 2015 por delitos graves y menos graves, tales como:
>
> 1. *Resisting Officer with Violence* (843.01)
> 2. *Corruption by Threat* (838.021.3B)
> 3. *Battery on Law Enforcement Officer* (784.07.2B)
> 4. *Resisting Officer Without Violence* (843.02)
> 5. *Assault on Law Enforcement Officer* (784.07.2A)
> 6. *Driving with License Suspended* (322.34.10B2)

Como parte del análisis y evaluación de esta querella, la DIPAC solicitó información sobre la corporación Power Expectation, LLC. al Departamento de Estado y a las agencias concernidas.

De la evaluación del expediente, el Panel sobre el FEI concluyó que la querella no cumple con los requisitos de ley para ordenar una investigación preliminar contra los funcionarios. Es meritorio mencionar que dicho Panel determinó lo siguiente:

> "Aunque del récord surge que el señor Echevarría no posee antecedentes penales en la jurisdicción de Puerto Rico, la información provista en la querella y corroborada parcialmente por documentos preliminares remitidos por el Departamento de Justicia del Estado de la Florida, sugiere la existencia de convicciones por delitos de violencia y resistencia a la autoridad, que aunque no, activan automáticamente la inhabilitación del Artículo 3.4, son relevantes para la evaluación del riesgo, confiabilidad e idoneidad moral de cualquier entidad que pretenda contratar con el Estado. No podemos ignorar que la ausencia de un requisito legal amplio para evaluar el historial penal general de los contratistas puede exponer al Gobierno a riesgos indebidos, especialmente en contratos de alta cuantía, urgencia o impacto público.
>
> Por consiguiente, aunque estamos de acuerdo en que legalmente no procede una investigación preliminar en este caso, la situación observa a reflexionar sobre la suficiencia de los mecanismos actuales de licitación y sobre la necesidad de considerar, desde la Legislatura o agencias reglamentadoras, si debe implantarse un estándar más uniforme que equipare los requisitos de integridad exigidos a funcionarios y empleados, con los que aplican a contratistas del Gobierno."

De la revisión de los expedientes en el Departamento de Estado realizada en el día de hoy, se confirma que el señor Eddie David Echevarría aparece como agente residente y presidente de *Power Expectations, LLC*, corporación número 526265. Ante dicha información, la Autoridad, en el ejercicio de sus deberes y obligaciones legales ante los foros regulatorios, requiere formalmente a la Oficina de Compras de Terceros Independiente (3PPO, por sus siglas en inglés) que reevalúe el informe presentado y la recomendación de los licitadores, en especial la de *Power Expectations, LLC*, para ser considerada como parte contratante con el Gobierno de Puerto Rico. Asimismo, solicitamos que se presente la justificación legal correspondiente para continuar el proceso de contratación, tomando en cuenta el lenguaje incluido en la resolución de referencia, específicamente:

> "En cuanto al derecho aplicable, el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, en su Artículo 3.4, dispone, en lo que respecta a la inhabilidad para contratar con el Gobierno, que cualquier persona, sea natural o jurídica, que haya sido convicta por infracción a los artículos 4.2, 4.3 0 5.7 de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental, supra, por infracción a alguno de los delitos graves contra el ejercicio del cargo público contra los fondos públicos de los contenidos en los artículos 250 al 266 de Código Penal de Puerto Rico, por cualquiera de los delitos tipificados en el Código Anticorrupción o por cualquier otro delito grave que involucre el mal uso de los fondos o propiedad pública, incluyendo sin limitarse, a

los delitos mencionados en la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, supra, estará inhabilitada de contratar o licitar con cualquier agencia ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico por el término aplicable bajo dicho Artículo....

...Sin embargo, aunque las limitaciones establecidas en el Artículo 3.4 del Código Anticorrupción se activan únicamente ante convicciones por delitos graves contra el ejercicio del cargo público, contra fondos o propiedad pública, o por delitos relacionados al mal uso de recursos públicos, surge una consideración adicional de política pública que merece ser destacada."

La 3PPO deberá presentar su respuesta por escrito a la Autoridad, a más tardar al mediodía del lunes, 15 de diciembre de 2025.

Atentamente,

Mary C. Zapata Acosta
Directora Ejecutiva

c Josué A. Colón Ortiz, Director Ejecutivo P3A; josue.colon@p3.pr.gov
Rubén Lugo, P3A, Gerente de Cumplimiento y Contratos; ruben.lugo@p3.pr.gov
Alexis G. Rivera Medina, Director Interino, Asuntos Jurídicos, PREPA; alexis.rivera@prepa.pr.gov

3PPO
Third-Party Procurement Office

16 de diciembre de 2025

Hon. Mary C. Zapata Acosta
Directora Ejecutiva
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico

Re: Requerimiento de Información sobre RFP 3PPO-0314-20-TPG2

Estimada Directora Ejecutiva Zapata:

El Third-Party Procurement Office acusa recibo de su comunicación relacionada con el Requerimiento de Información sobre el RFP 3PPO-0314-20-TPG2 y, en particular, con la solicitud de que se reevalúe el informe y la recomendación de los licitadores, específicamente en lo concerniente a Power Expectations, LLC, a la luz de la Resolución emitida por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente en el caso NI-DJ-2025-006.

Luego de un análisis jurídico y administrativo del planteamiento, el 3PPO informa respetuosamente que no procede una reevaluación del proceso. La evaluación de responsabilidad del proponente fue realizada, documentada y concluida conforme al marco legal vigente, y no ha surgido información nueva ni una determinación adjudicativa que altere el récord administrativo existente.

La Resolución del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente citada en su comunicación es clara en cuanto a que no se encontró mérito para iniciar una investigación, lo que jurídicamente implica la inexistencia de causa probable, imputación formal o adjudicación penal. En ausencia de una determinación de esa naturaleza, no existe base legal para invalidar, reabrir o repetir una evaluación administrativa debidamente realizada.

En cuanto a la estructura corporativa del proponente, el 3PPO evaluó la información provista y constató que la persona señalada posee una participación accionaria minoritaria, sin control corporativo ni poder decisional determinante sobre la entidad. Bajo el ordenamiento jurídico aplicable, dicha participación no constituye causal de inhabilitación automática ni de exclusión para contratar con el Gobierno de Puerto Rico.

El Artículo 3.4 del Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico establece causales de inhabilidad únicamente cuando existe una convicción por delitos específicamente tipificados relacionados con corrupción pública, mal uso de fondos o conductas expresamente contempladas en dicho estatuto. En este caso, no existe convicción aplicable que active esa prohibición legal, por lo que dicho artículo no resulta de aplicación como fundamento para descalificar al proponente ni para requerir una reevaluación del proceso competitivo.

El 3PPO reconoce la reflexión contenida en la Resolución del FEI en cuanto a posibles consideraciones de política pública a futuro. No obstante, el 3PPO no es un ente formulador de política pública, sino un organismo técnico encargado de ejecutar procesos de adquisición conforme a la legislación y reglamentación vigentes al momento del proceso. Cualquier modificación a los estándares de elegibilidad o integridad corresponde a la Gobernadora y a la Asamblea Legislativa, y no puede aplicarse retroactivamente ni imponerse mediante un requerimiento administrativo particular.

En ausencia de un mandato legal expreso, de una convicción aplicable o de hechos nuevos que alteren sustancialmente el récord, reabrir la evaluación realizada sería incompatible con los principios de certeza administrativa, razonabilidad y debido proceso, ampliamente reconocidos en el derecho administrativo puertorriqueño.

Por todo lo anterior, el 3PPO concluye que no existe fundamento legal para proceder con una reevaluación, y reafirma que la evaluación y recomendación emitidas cumplen con el marco legal aplicable y se sostienen válidamente en el expediente administrativo.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional dentro de este marco.

Atentamente,

Osvaldo Carlo,



Presidente
Third-Party Procurement Office (3PPO)